VII. COLECTIVOS SOBREVULNERADOS

2. Jóvenes detenidos en cárceles federales

Resulta indiscutible que la cárcel, en tanto Institución total, y el régimen penitenciario al que se ven sometidos los jóvenes en particular, producen un fuerte impacto que afecta la integridad de la persona, produciendo un proceso de deterioro socio-psico-biológico. Dichos efectos tienen lugar tanto durante el período de encarcelamiento como al momento de recuperar la libertad y son agudizados por las acciones de estigmatización y criminalización que se despliegan dentro y fuera del encierro. Sumado a ello, la sistemática y reiterada vulneración de derechos de los adolescentes ejercida por las autoridades penitenciarias –castigo y malos tratos, aislamiento, ausencia de educación, trabajo y salud, entre otros– han merecido una particular atención por parte de este Organismo.

Es así que en el año 2010 se creó el equipo de “Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de Libertad” –en adelante, el Equipo de Jóvenes–, creación a la que dedicaremos las primeras líneas del capítulo para, en segundo lugar, detallar el modo en que es distribuida la población de los detenidos más jóvenes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

El tiempo que transcurre entre una presentación judicial y su consecuente resolución nos exige situar en un tercer apartado las acciones realizadas con motivo de la interposición de un habeas corpus Colectivo Correctivo a favor de un pabellón de jóvenes que se hallaba sectorizado y en aislamiento y las primeras estrategias desplegadas por el servicio para “resolver” la situación. En ese sentido, la creación del Régimen Intensivo para Internos Conflictivos (RAI), la posterior convocatoria por parte del SPF –a raíz de la manda judicial– a conformar un Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para Jóvenes Adultos y el Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades de jóvenes adultos, como producto de esas reuniones.

La experiencia de trabajo focalizado en las situaciones de encierro que más violentan los derechos de los jóvenes, nos lleva a ubicar en un cuarto apartado los resultados del relevamiento realizado con los detenidos alojados bajo la modalidad de Resguardo de Integridad Física.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Comprometidos en el cumplimiento y garantía de todos los derechos de los jóvenes, dedicamos un último apartado a los talleres culturales organizados por este organismo como dispositivos atenuantes de los efectos de prisionización.

2.1. Creación del Equipo “Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de libertad”

La compleja problemática que presenta el colectivo de jóvenes alojados en el SPF ha ameritado desde la Procuración Penitenciaria un abordaje poblacional específico. Por ello la creación, mediante Resolución N°061/11, del equipo “Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de libertad”.¹ A fin de lograr un trabajo integral con dicho colectivo, el equipo es conformado de modo interdisciplinario con profesionales provenientes de la abogacía, la sociología y la psicología.

Los jóvenes constituyen un colectivo sobrevulnerado en el sistema de encierro. Teniendo en cuenta sus características particulares –el proceso de formación por el que transitan, los violentos procesos de exclusión social, la trayectoria institucional por la que han atravesado, la forma en que se les aplica el tratamiento penitenciario, el trato dispensado por la agencia en custodia, entre otras– y la necesidad permanente de crear estrategias innovadoras para afrontar sus demandas, el equipo ha formalizado un trabajo anual, fijando objetivos concretos –los puntos salientes serán desarrollados en este capítulo–. Además, la labor cotidiana ha permitido identificar diversas problemáticas que comprometen y vulneran el bienestar bio-psico-social de los jóvenes y ha promovido el consecuente desarrollo de nuevas formas de intervención.

2.2. Distribución de los Jóvenes en el ámbito del SPF

El artículo 197 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad prevé que la población comprendida entre 18 y 21 años de edad² debe recibir un alojamiento y trato diferencial, y la tarea debe estar empeñada en la educación, el trabajo y los vínculos familiares. Conforme a ello el SPF dispone, en el Área Metropolitana, del Complejo Federal para Jóvenes Adultos,³ destinado al alojamiento de varones y un sector diferenciado

¹ Reconociendo la importancia, con fecha 31 de marzo de 2011, se crea en el ámbito de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos.

² Los llamados Jóvenes Adultos, según categoría penitenciaria.

³ Ubicado en la localidad de Marcos Paz de la provincia de Buenos Aires, el Complejo Federal de Jóvenes Adultos (en adelante CFJA) está conformado por la Unidad 24, Unidad 26, Centro de Rehabilitación para Drogodependientes (CRD) y Establecimiento Anexo para Jóvenes Adultos Módulo V - CPF II (en adelante Módulo V - Anexo).

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

en el interior de la U.3 para jóvenes mujeres. En el interior del país, el Instituto de Jóvenes “Dr. Julio A. Alfonsín” (U.30) ubicado en la capital de la provincia de La Pampa, y durante 2011 se ha agregado un sector para varones y uno para mujeres en el Complejo Penitenciario Federal III (CFNOA).

A diciembre de 2011 este colectivo poblacional se encontraba compuesto⁴ por 37 mujeres y 488 varones,⁵ ascendiendo a una cifra total de 525 los jóvenes privados de libertad en el ámbito del SPF. Siendo distribuidas las mujeres de la siguiente manera, 25 en la U.3, 6 en la U.31⁶ y 6 en el Instituto Federal de Mujeres (CFNOA). Del total de varones, 458 se hallaban alojados en el CFJA; 121 en la U.24, 24 en la U.26, 33 en el CRD y 280 en el Módulo V - Anexo. En el Interior del país había 17 jóvenes en la U.30 y 10 en el Instituto Federal de varones (CFNOA).

2.3. Habeas corpus correctivo colectivo

a. La interposición y los obstáculos en el desarrollo de la acción judicial

Mediante Resolución DN N°905,⁷ se crea en el ámbito del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz el Establecimiento Anexo para Jóvenes Adultos (en adelante Módulo V - Anexo).

Durante el segundo semestre del año 2010 mediante visitas regulares al Módulo V -Anexo, entre otras cosas se pudo constatar que las personas detenidas en el Pabellón 3 se encontraban sometidas a un régimen cruel de encierro, sectorización y aislamiento.

Los jóvenes permanecían encerrados en sus celdas durante 22 horas y media por día, se hallaban sectorizados en cuatro grupos, pudiendo hacer uso del espacio común (SUM) de forma alternada. Todas las actividades vitales debían desarrollarse en la hora y media que cada joven tenía asignada a “recreo”. De más está agregar que los horarios definidos para el *recreo* no contemplaban sus necesidades, dándose casos de jóvenes que no podían contactarse con sus familiares ni con sus defensores por impedimentos de horarios.

Respecto al tratamiento penitenciario y en lo que concierne a la educación formal, el cronograma para el pabellón 3 disponía la concurrencia a clases todos los días en horario matutino. Sin embargo, de las entrevistas con los jóvenes y las visitas a la unidad, se

⁴ Según parte de población del 29 de diciembre de 2011 del SPF.

⁵ Tres jóvenes varones se encontraban alojados en el Anexo Servicio Psiquiátrico para Varones.

⁶ Esta Unidad no dispone de un alojamiento diferenciado para las jóvenes.

⁷ Mediante la cual se aprueba el traslado de los jóvenes alojados en el Módulo IV del CPF I - Ezeiza hacia el Módulo V del CPF II - Marcos Paz. Traslado efectivizado durante los días 26 y 27 de julio de 2010.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

pudo constatar que la efectiva asistencia a la escuela se realizaba de manera esporádica; que no concurrían todos los jóvenes y que de ninguna manera cumplían con las 3 horas y media previstas para el dictado de las clases.

A través del monitoreo permanente del Módulo V - Anexo, las entrevistas personales con los adolescentes alojados en el Pabellón 3, las entrevistas con los jóvenes sancionados, los informes solicitados a las autoridades penitenciarias, y de acuerdo a la misma clasificación penitenciaria, se pudo constatar que el Pabellón 3 era destinado al alojamiento de jóvenes “conflictivos” o que tenían problemas para convivir con el resto de la población. Dicha clasificación penitenciaria motivó la aplicación de un “régimen de sectorización”.

Bajo esta modalidad de encierro se violan derechos no restringidos por la pena de prisión: entre ellos el derecho a las comunicaciones, a la educación, al trabajo, a las actividades recreativas y al esparcimiento; el derecho a una adecuada atención a la salud; a la integridad física y psíquica, y el derecho al desarrollo de los vínculos sociales y afectivos dentro y fuera de la institución.

Toda esta situación ameritó que, con fecha 3 de noviembre de 2010, este Organismo interpusiera acción de habeas corpus correctivo colectivo –en los términos del artículo 43 *in fine* de la Constitución Nacional y la Ley 23.098.⁸

El habeas corpus colectivo correctivo fue rechazado por el juzgado de primera instancia, y confirmada la resolución por la Cámara de Apelaciones en los términos del art. 10, segundo párrafo, Ley 23.098. Resolución que no fue notificada a la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Contra el fallo de la Cámara de Apelaciones se interpuso recurso de Casación por entender que las irregularidades en el trámite impreso a la causa privaban de sustento a la resolución impugnada.

La Sala de ferias de la CNCP, en una sentencia ejemplificadora, resolvió “*HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, ANULAR el pronunciamiento impugnado y REMITIR en carácter urgente las actuaciones a su origen...*”.

Vueltos los autos a primera instancia, el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°3 Secretaría 11 del mismo departamento ordenó diferentes puntos de

⁸ Véase Informe Anual 2010 Capítulo VI: “Informe sobre tramitación de Habeas Corpus”, p. 343.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

prueba, muchos de los cuales fueron solicitados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Durante la tramitación del habeas corpus se realizaron pericias arquitectónicas, inspecciones judiciales, pericias con el cuerpo médico forense, pericias psicológicas, se incorporaron las historias clínicas de los jóvenes, organigrama de educación, trabajo, actividades recreativas y organigrama específico del Pabellón 3.

En tanto el desarrollo de la causa, se registraron numerosas acciones por parte de agentes penitenciarios que permitieron presumir una clara falta de colaboración y escaso compromiso con el procedimiento judicial. La enumeración de esos actos, así como su denuncia formal quedaron plasmadas en un expediente judicial,⁹ cuyas constancias se agregaron como prueba en el habeas corpus.

El 19 de abril de 2011 se llevó a cabo la audiencia en los términos del art. 14 de la Ley 23.098, con la presencia del Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, las autoridades del CFJA, los diferentes profesionales que intervinieron y avalaron la sectorización como ser: psicólogos, médicos y autoridades de educación del servicio penitenciario; y por otro lado el Procurador Penitenciario de la Nación, el Director General de Protección de Derechos Humanos de la PPN, y los diferentes asesores que intervinieron en el proceso del habeas corpus: el equipo médico y de psicólogos del área de salud mental, el Equipo de Trabajo “Niños, Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad” y asesores legales.

En la Audiencia se puso en evidencia la existencia de un abordaje penitenciario de la conflictividad de jóvenes adultos que implicaba la implementación de un régimen que vulneraba diversos derechos.

⁹ Véase resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°3 Sec. 5 de fecha 23 de mayo de 2011, causa 4577, punto 6 en el que se dispone: “ORDENAR LA OBTENCIÓN DE COPIAS AUTENTICADAS DEL PRESENTE A FIN DE SUSTANCIAR LEGAJOS, para investigar la presunta comisión de delitos de acción pública (artículo 17, párrafo final, de la Ley 23.098), confiriendo intervención al Juzgado Federal de esta ciudad que por orden de turno corresponda intervenir, a saber: A) *El suceso aludido como acaecido el día 27 de enero pasado en el ámbito del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, a instancias de la concurrencia de las agentes Laura Maccarrone y Natalia Osorio Portolés de la Procuración Penitenciaria de la Nación, siendo denunciados los penitenciarios Subalcaide Juan José Mancel, el Alcaide Mayor Edgardo Santos Lazo y el Jefe de Requisa Silvio Cáceres; B) La presunta coacción ejercida por los citados agentes penitenciarios MANCEL y LAZO, en relación a la denuncia efectuada por los internos G y R, que determinara la sustanciación del expediente N°4586 de este registro y; C) La presunta coacción ejercida a los internos C y C, ello fundado en brindar versiones disímiles de su situación carcelaria en oportunidad de la inspección judicial realizada y la celebración de la audiencia oral*”. Quedando radicada la misma en el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 Sec. N°5 del Departamento Judicial de Morón, causa N°4676 “s/ Av. Pta. Inf. Comisión de delito de acción pública”.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Se denunció, y se pudo acreditar a lo largo del proceso, la existencia de una subordinación de los principios resocializadores a un modelo excluyente de seguridad y de mantenimiento del orden institucional.

b. Régimen de Abordaje Intensivo para Internos Conflictivos

En virtud de lo anteriormente señalado y a raíz de la presentación del habeas corpus, el SPF inició diversas estrategias encubridoras de la situación del Pabellón 3.

A través de la Resolución DN N°193, de fecha 16 de febrero de 2011, el Sub Director del SPF resolvió: “ART. 1- APRUÉBENSE la “Distribución y Asignación de Alojamiento del Complejo Federal para Jóvenes Adultos” y el “Régimen de Abordaje Intensivo para Internos Conflictivos”.

Al día siguiente de dicha resolución se produjo un intempestivo cambio de alojamiento a raíz del cual fueron trasladados algunos de los jóvenes que se encontraban alojados en el Pabellón 3 del Módulo V - Anexo hacia los Pabellones A y B de la Unidad 24, donde comenzaría la aplicación del Régimen de Abordaje Intensivo (en adelante RAI) para internos “conflictivos” o de “riesgo” según la Resolución DN N°193.

Esta nueva Resolución, como respuesta a la denuncia radicada por la PPN, trasladaba de manera enmascarada la problemática de un sector de alojamiento a otro del Complejo.

El equipo de jóvenes realizó, a partir de la implementación del RAI, un monitoreo sobre el diseño, desarrollo e impacto del programa, a fin de poder evaluar sus resultados. De esta manera se concurrió a los Pabellones A y B, donde se llevaron a cabo entrevistas individuales con los detenidos así como también con los profesionales a cargo del régimen y las autoridades de turno. A partir de ello se tomó conocimiento de la modalidad de aplicación de esta nueva disposición.

Respecto a los detenidos sobre los que se aplicaría el RAI, los jóvenes sumaban un total de 18 y fueron alojados en los pabellones A y B, separados en procesados y condenados. El equipo técnico del RAI fue conformado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, una psicopedagoga, un eclesiástico y el jefe de seguridad interna del sector.

Los primeros interrogantes que le surgieron a este Organismo respecto al nuevo régimen, hacían referencia a la capacitación de los profesionales técnicos del equipo. En

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

caso de que haya habido capacitación específica, surgía la pregunta acerca de si ésta había estado orientada a lo específico de la franja etaria en cuestión –jóvenes, adolescentes– o si se trató de algo orientado a “lo conflictivo y peligroso” exclusivamente.

A partir del trabajo realizado en la Unidad –con una concurrencia semanal– quedaron evidenciadas diversas cuestiones que permitieron arribar a las siguientes conclusiones: en primer lugar, por la modalidad (tiempo y forma) en que se llevó a cabo la propuesta contenida en la mencionada Resolución, el RAI no constituía un dispositivo implementado para lograr una atención integral de la problemática singular de cada joven, sino, por el contrario, comportaba una respuesta institucional reactiva, improvisada, sin consistencia programática, que apelaba a criterios repetitivos y estandarizados en la dinámica de la gestión penitenciaria.

Se trataba de un improvisado régimen de seguridad instalado en el contexto penitenciario que no se encontraba previsto por la ley, por lo que su aplicación significaba una nueva y gravosa vulneración de los derechos fundamentales de los adolescentes. El nuevo régimen y consecuente realojamiento quedaba fundamentado en un presuntivo diagnóstico que resultaba ser el mismo para todos los detenidos: trastorno de la personalidad con rasgos antisociales y trastorno por dependencia a sustancias psicoactivas, justificando con ello la estadía de los supuestos “*internos conflictivos*” en un sector común de la U.24. Basado en una inexacta indagación y abordaje multidisciplinario –trabajo social, psicología y psiquiatría– se arribaba a un *diagnóstico criminológico* que apelaba a conceptos tales como conflicto/conflictividad, considerándolos sinónimos de violencia y peligrosidad. Conceptos que además no hacen alusión a una cualidad individual sino que remiten a un aspecto psíquico de la condición humana.

Por ello decimos que a través del RAI se cerraba toda posibilidad de camino a la singularidad de los jóvenes detenidos, y por el contrario, se presuponía la producción de identidades comunes, que se evidenciaba en la caracterización general que se hacía de ellos.

Por otra parte, en referencia al mencionado diagnóstico, es importante resaltar que éste fue confeccionado en la Unidad 24. Es decir, que se realizó con posterioridad al realojamiento de los jóvenes del pabellón 3 en la Unidad 24, por lo que no se cumplió con la intervención técnica y asistencial que indicaba la disposición. Ello demuestra una

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

vez más que el RAI se constituyó como una estrategia –en el contexto del habeas corpus– destinada, como la sectorización, a la gestión y gobierno de la población.

Si bien en la actualidad las autoridades penitenciarias del CFJA refieren no encontrarse ya en funcionamiento el Régimen Intensivo para Internos Conflictivos – corroborándose el carácter transitorio y reactivo del mismo– este organismo se encuentra a la espera de la comunicación que formalice dicha información.

c. La sentencia

El día 23 de mayo de 2011, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°3 Secretaría N°11 de Morón, dictó una nueva sentencia rechazando la acción de habeas corpus. Sin embargo dispuso, entre otras medidas, “*ENCOMENDAR a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal la inmediata convocatoria a conformar un equipo de trabajo interdisciplinario integrado entre otros, por el titular y funcionarios intervinientes de la Procuración Penitenciaria, los Amicus Curiae del presente (CELS y ADC), la socióloga Alcira Daroqui –sin perjuicio de que se integren otros actores de la sociedad civil–, para que en la continuidad de la labor desarrollada, se procure generar nuevas alternativas y propuestas sobre el abordaje de los jóvenes adultos con alta potencialidad conflictiva, determinándose a los fines indicados un plazo ordenatorio de sesenta (60) días corridos para elaborar un protocolo con puntos de acuerdo básicos, atendiendo a los parámetros que emanan de la presente decisión y que deberá ser remitido a esta sede para su consecuente homologación*”. Asimismo resolvió “*DISPONER que las autoridades del Complejo Penitenciario Federal, se abstengan de implementar toda medida que determine directa o indirectamente un régimen de trato que consista en la sectorización en grupos de los pabellones en donde se alojen Jóvenes adultos con alta potencialidad conflictiva, siendo que para el caso excepcional que se estime imprescindible su ejecución, aun por un plazo mínimo, deberá ser autorizada por los jueces competentes, previo conocimiento de los motivos extraordinarios que lo aconsejen, duración y objetivos buscados*”.

d. Apelación. Desistimiento

Desde la perspectiva de este organismo, la sentencia incurría en graves deficiencias que ameritaban el pedido de revocación a través de los recursos correspondientes. El magistrado entendió que resultaba necesario ordenar el cese del régimen de sectorización, por lo cual este organismo no podía dejar de cuestionarle que

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

haya desestimado la acción de habeas corpus. El pronunciamiento de la ilegitimidad del acto lesivo entró en contradicción con la resolución tomada. Entendemos que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a proveer protección judicial a quien sufre la vulneración de un derecho. Esa protección, además de existir, debe ser efectiva y eficaz, para poner fin a la violación de derechos que fuera puesta de resalto en el escrito de inicio de la acción. Precisamente el deber de amparar judicialmente a las víctimas se vio cercenado desde el momento en que se impide la prosecución del procedimiento.

Sin embargo el organismo consideró necesario y oportuno priorizar la búsqueda de soluciones por la vía del dialogo, conforme a lo resuelto por el Juzgado Federal N°3, Secretaría N°5 de Morón en el punto 3 de la parte resolutive de la sentencia, por lo cual este organismo decidió desistir el recurso de apelación.

e. Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para Jóvenes Adultos

En fecha 7 de junio de 2011 mediante resolución DN N°1172 la Dirección Nacional del SPF estableció la conformación de un Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para Jóvenes Adultos. Dicho Consejo estuvo conformado por la Dirección Nacional del SPF, funcionarios de la Dirección General de Régimen Correccional, del área de readaptación social y autoridades del Complejo Federal de Jóvenes Adultos. Además, la Procuración Penitenciaria de la Nación, representada por sus máximas autoridades y asesoras del equipo de “Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de libertad”, Organizaciones no Gubernamentales –específicamente CELS y ADC–, representantes de la Defensoría General de la Nación y de la Defensoría Pública de Ejecución. Representantes del Ministerio de Educación de la Nación –específicamente de educación en contextos de encierro–, del Ministerio de Justicia mediante representantes de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, del Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de funcionarios de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, y por último funcionarios de la Procuración General de la Nación.

En la primera reunión fechada el día 13 de julio de 2011 se acordó la elaboración de un protocolo de actuación, y si bien no se establecieron plazos temporales para la redacción del mismo, dicho proceso resultaba de fundamental importancia, dado que la sentencia judicial fijaba plazo de presentación.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

La propuesta del Equipo de Jóvenes de esta Procuración fue enviada a todos los participantes, y establecía como argumento central la premisa según la cual la violencia dentro de la cárcel no se circunscribe a algunos jóvenes, sino que es intrínseca a la institución. Así, dicha propuesta identificó al menos cinco posibles fuentes de conflicto, desviando el análisis de los jóvenes y posicionándolo en la institución carcelaria, no sólo por su rol generador del conflicto, sino también porque la propia administración penitenciaria está facultada para evitar o resolver situaciones críticas.

Por otro lado el SPF realizó una propuesta respecto del Abordaje Intensivo para internos conflictivos, régimen que se encontraba en funcionamiento desde febrero del año 2011, intentando revertir la situación denunciada en pabellón 3.

Esta propuesta no sólo adjudicaba el problema de la violencia a unos cuantos jóvenes sino que éstos debían ser pasibles de análisis psicológicos para “[...] establecer si el interno registra alta impulsividad, baja tolerancia a la frustración y demás rasgos que permitan establecer un riesgo cierto de que éstos generen hechos de violencia”.¹⁰ Dicho análisis ya había sido puesto en cuestionamiento en sede judicial y fue retomado en instancias del Consejo.

Los puntos propuestos como fuente de conflictos (según el análisis del Equipo de jóvenes) y que conformaron los temas del protocolo fueron los siguientes:

- La violencia institucional y los malos tratos;
- La violencia entre jóvenes;
- Las adicciones cuando no son correctamente tratadas;
- La imposibilidad de ejercer el derecho a la educación y al trabajo;
- La imposibilidad de acceder a actividades recreativas y culturales;
- La vulneración del derecho a la salud;
- Las dificultades de establecer contacto con el mundo exterior.

En este sentido, se propuso abordar la cuestión de la violencia desde una dimensión legal e integral. Es decir, en términos de realización efectiva de derechos, siempre que la vulneración de los mismos es el principal productor de conflictos.

Durante el proceso de diálogo se acordaron los distintos apartados. El primer tema a tratar fue propuesto por la PPN sobre *violencia institucional*. Dada la relevancia que

¹⁰ Véase la resolución N°193 de DN de febrero de 2011 “Distribución y Asignación de Alojamiento” y el “Régimen de Abordaje Intensivo para Internos Conflictivos”.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

tiene para este organismo la prevención de los malos tratos y la tortura, el fin de acordar sobre un cuerpo de principios que previniesen los malos tratos o que estipulasen acciones posibles frente a hechos consumados de tortura, no sólo constituía un objetivo de máxima importancia para el Organismo, sino que la realidad misma fijaba esta prioridad. Es importante destacar que el Director Nacional de Servicio Penitenciario Federal y el Procurador Penitenciario de la Nación asistieron a la reunión a los fines de acordar los puntos respecto de este tema.

Durante el proceso de diálogo con el SPF en el Módulo V - Anexo se produjo una fuerte y cruenta golpiza en la que un joven sufrió graves lesiones, que ameritaron la denuncia penal por parte de este organismo.¹¹

Los representantes del Ministerio de Educación de la Nación aportaron una importante propuesta que no sólo garantizaba el acceso a la educación de todos los jóvenes, sino que comprometía al mismo Ministerio como responsable de los diferentes dispositivos, sus contenidos y la función de los docentes.

Asimismo se convocó al Ministerio de Trabajo a los fines de –sobre la base del documento que se estaba trabajando– realizar tanto propuestas de contenido como mecanismos para garantizar trabajo formativo en las unidades. En la última reunión de la que participó el representante de dicho Ministerio, informó a la representante de la

¹¹ El hecho tuvo lugar en el Módulo V - Anexo Complejo Federal Jóvenes Adultos, el día 16 de julio de 2011, siendo advertida la PPN por la madre de B.O.N. luego de haberlo visto en silla de ruedas, muy lastimado y angustiado. El adolescente manifestó al equipo de Investigación y Documentación de casos de Tortura y Malos Tratos que fue golpeado por aproximadamente ocho agentes penitenciarios, los cuales se encontraban totalmente alcoholizados (es importante recordar que el 16 de julio es el día del Agente Penitenciario), quienes le propinaron palazos, le hicieron “chanchito” y le aplicaron el “pata-pata”, sumando a ello patadas en la cabeza. Los golpes recibidos en el cuerpo fueron con palos y pisadas en las orejas como si estuviesen apagando un cigarrillo contra el piso. El joven manifestó que la situación más humillante, gravosa y denigrante fue el intento de introducirle un bastón en el ano. Al finalizar la golpiza fue amenazado y le advirtieron “vas a vivir verdugueado toda tu vida”. Luego lo llevaron a bañarse con agua helada, reiterando el baño en tres oportunidades, y a continuación lo dejaron totalmente desnudo en una celda acolchonada, temblando de frío. Al cabo de un tiempo lo fueron a buscar con una silla de ruedas. Lo llevaron al Hospital Municipal de Marcos Paz donde le tomaron placas, le hicieron las primeras curaciones y luego lo trasladaron al HPC de la Unidad 24. Como consecuencia de la golpiza el joven sufrió dos fisuras en la pierna derecha, derrames en los ojos, lastimaduras en las orejas, coágulos en las piernas, lesiones en las muñecas y manos, ambas piernas con importantes edemas, hematoma en las rodillas, lesiones en los empeines y planta de los pies, fractura en los huesos metatarsianos del pie derecho e izquierdo, etc.

B.O.N. autorizó a la PPN a presentar la denuncia penal contra los responsables de los hechos de tortura, quedando la misma radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°2 Secretaría N°6 del Departamento Judicial de Morón el 28 de julio de 2011. Podemos destacar que ante la noticia del caso, Dirección Nacional del SPF dispuso la instrucción de un sumario y la separación cautelar de los agentes penitenciarios involucrados en la denuncia. El 2 de diciembre de 2012 el Procurador Penitenciario se presentó como parte querellante. Asimismo, el mismo detenido asumió el rol de querellante con patrocinio letrado de la Defensoría General de la Nación. La causa se encuentra en plena etapa investigativa, llevándose a cabo una serie de medidas de prueba.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Dirección Nacional del SPF que al no haber convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad no podría hacer ninguna propuesta y por tal motivo se retiró.

Por otro lado, también se solicitó se convocara al Director de Salud Mental y Adicciones de la Nación, el cual sugirió se incorporen diferentes leyes nacionales al protocolo (Ley 26.529 “Derechos del Paciente”; Ley 26.657 “Salud Mental”) ya que ellas prevén dispositivos específicos. Por último se comprometió a enviar una propuesta respecto del tratamiento de las adicciones para jóvenes en contexto de encierro.

El 19 de octubre de 2011 se realizó la última de las sucesivas reuniones celebradas, en la que se repasaron todos los puntos consensuados y se discutieron y acordaron algunas mínimas reformas de redacción. La entonces jefa de asesores del Director Nacional del SPF –Dra. Laura Lopresti– se comprometió a aunar todos los criterios de redacción e incorporar las últimas propuestas consensuadas, volver a convocar a los participantes del Consejo para suscribir el “*Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades de jóvenes adultos*”.

En fecha 3 de febrero de 2012 la Procuración Penitenciaria presentó ante el Juzgado Federal la última propuesta consensuada, debido al silencio del SPF respecto de la consecución del trámite desde octubre hasta febrero del año 2012. Posteriormente, con fecha 12/03/2012 el SPF realizó la presentación ante el Juzgado Federal del “Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades de jóvenes adultos”, estándose todavía a la espera de la homologación y publicación del mismo.

Es importante resaltar que si bien aún no se ha homologado el documento final, ha sido de gran relevancia el trabajo realizado para producirlo y consensuarlo y significará un enorme avance el lograr su aprobación judicial y consecuente aplicación.

f. Protocolo para prevenir y resolver situaciones de violencia en unidades de jóvenes adultos

Violencia institucional y malos tratos

1) Los funcionarios penitenciarios, en sus relaciones con los jóvenes adultos detenidos, no emplearán la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario, de la manera menos lesiva y en forma proporcional al conflicto que se intente abordar con el fin de mantener la seguridad y el orden en los establecimientos carcelarios o cuando corra peligro la integridad física de las personas.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Los funcionarios penitenciarios que hagan uso de esta prerrogativa deberán informar sobre el incidente al Director del Establecimiento en forma inmediata y por escrito.¹² Dicho informe deberá contener los nombres y apellidos de lo/s detenido/s y de los agentes que hubieren participado en el incidente, así como los nombres y apellidos de las autoridades que estuviesen a cargo del personal (jefe de turno, jefe de requisa, etc.), así como del jefe de seguridad interna.

El acta que se realice sobre el incidente deberá ser remitida al juez competente y a la defensa. Asimismo podrá ser consultada, sin limitación alguna, por la Procuración Penitenciaria de la Nación o cualquier otro organismo de derechos humanos sea gubernamental o de la sociedad civil.

Si el hecho de violencia ameritara la iniciación de alguna investigación administrativa por parte del SPF y/o el Ministerio de Justicia de la Nación se garantizará el acceso de la PPN a las actuaciones.

2) El personal penitenciario (ya sean los agentes de seguridad como los profesionales dedicados al tratamiento) que trabaje con jóvenes adultos debe ser especialmente seleccionado y debe tener una capacitación especial acreditada para trabajar con esa franja etaria y sus problemáticas sociales y culturales.¹³ Se promoverá la capacitación permanente del personal penitenciario.

En el caso del personal civil será el organismo o ministerio de quien dependa el encargado de seleccionar y brindar la capacitación correspondiente en relación a la labor que desempeñe con los jóvenes.

Los agentes penitenciarios que vayan a ocupar cargos en las unidades de jóvenes deberán ser especialmente seleccionados. Para ello, deberá considerarse: su idoneidad, su elección vocacional, su trayectoria, la existencia de causas penales en su contra, etc. Deberán estar a disposición de los organismos gubernamentales u organizaciones de la

¹² Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Mínimas ONU), Regla 54; Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, art. 3. Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979. Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Principios 4, 6, 9, 15 y 16. Aprobada en fecha 7 de septiembre de 1990 en la ciudad de La Habana, Cuba, por el Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

¹³ Reglas Mínimas ONU 46, 47 y 48; Coyle, Andrew, *La Administración Penitenciaria en el Contexto de los Derechos Humanos. Manual para el Personal Penitenciario*, Segunda Edición, Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, King Collage London, Foreign & Commonwealth Office London, p. 24 y ss.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

sociedad civil –cuyo objetivo sea la defensa de los derechos humanos– los legajos personales del personal penitenciario que se desempeñe en dichas unidades.¹⁴

3) El personal penitenciario deberá utilizar la correspondiente placa identificatoria conforme lo establecido en el punto 212 ter del Capítulo XIII del Reglamento de Uniformes para el Personal del Servicio Penitenciario Federal.¹⁵ La utilización de dicha placa tiende a brindar una precisa y clara individualización del personal penitenciario, a la vez que es una garantía de transparencia y legalidad en su actuación.

En el caso que un agente penitenciario no utilice placa y/o se niegue a dar su nombre, se procederá a convocar a la autoridad o jefe inmediato y a labrar un acta en donde se registre la infracción y la sanción correspondiente o en su caso la instrucción de un sumario administrativo. En el caso que se instruya un sumario, éste podrá ser consultado por cualquier organismo, ya sea gubernamental o de la sociedad civil –cuyo objetivo sea la defensa de los derechos humanos–. Será pasible de la sanción no sólo el agente sino también el jefe directo por no hacer cumplir la normativa.

4) La autoridad penitenciaria deberá instalar, en los respectivos establecimientos carcelarios, un sistema de cámaras de video que permita monitorear permanentemente el contacto de los jóvenes adultos detenidos con el personal penitenciario. La autoridad penitenciaria garantizará que el sistema de monitoreo funcione en forma adecuada e ininterrumpida.

El sistema de monitoreo que se implemente deberá garantizar un registro de imágenes y sonido que no pueda ser alterado o manipulado, debiendo tener acceso irrestricto a él la Procuración Penitenciaria de la Nación y otros organismos de control estatales o de la sociedad civil.

5) En aquellos casos en que resultare la muerte o lesiones de un joven, la autoridad penitenciaria deberá informar inmediatamente a los jueces competentes, a su defensor,

¹⁴ Véase Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley. ONU Principios 18 y 20.

¹⁵ Véase Reglamento de Uniformes para el Personal del Servicio Penitenciario Federal N°2025 (Agregación B.P.N. N°101/00 - 212 ter y 212 cuater). *212 Ter: Placa Identificatoria: Uso de la placa identificatoria: La Placa Identificatoria será de uso obligatorio para todo el personal y se utilizará en los Uniformes Nros. 3 Servicio y 4 Tarea y en aquellos descriptos en los Capítulos IV, V y VI del Reglamento de Uniformes para el Personal del Servicio Penitenciario Federal.*

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

al Ministerio Público Fiscal; a la Procuración Penitenciaria de la Nación y a los familiares de la persona detenida, el tipo de lesión o causa de muerte, el lugar donde se haya producido, los motivos, el tratamiento suministrado a las lesiones y diligencias médicas (traslado a hospital penitenciario o extramuros, etc.).

6) Se alentará la abolición del uso del aislamiento en celda individual.¹⁶

Se encuentra prohibido disponer el encierro en celda individual de personas más allá de los supuestos previstos en la ley, es decir, en casos en que no hayan sido objeto de una resolución del Director del Establecimiento que le imponga una sanción disciplinaria a tenor del art. 87 de la Ley de Ejecución Penal o que disponga la separación provisional del detenido, a tenor de lo previsto en el art. 35 del Reglamento General de Disciplina (Decreto 18/96).

El aislamiento es una medida excepcional, estrictamente limitada en el tiempo, utilizada como último recurso cuando se demuestre que no existe alternativa menos lesiva para salvaguardar la integridad de las personas.¹⁷

Deberá mantenerse respecto a esos detenidos un régimen que les permita acceso al patio y a actividades recreativas, laborales y educativas; asistencia y seguimiento médico y psicológico y comunicación con el exterior.

Sólo podrá hacerse efectiva si la celda destinada a esos efectos cumple con los recaudos necesarios para llevar a cabo la medida sin afectar la integridad física y la dignidad de la persona detenida.¹⁸

El aislamiento sólo se aplicará cuando un médico y un psicólogo, después de haber examinado al detenido, hayan certificado por escrito que éste puede soportarlo.¹⁹ Igual proceder será aplicable a cualquier otra sanción que pueda perjudicar la salud física o mental del detenido.²⁰ Si el detenido involucrado fuera una persona infectada por el virus de VIH o enferma de SIDA, se requerirá además la autorización del médico

¹⁶ “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos” adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 45/111, punto 7.

¹⁷ Resolución 1/08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, CIDH, Principio XXII. Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 11 de enero de 2006 durante la 952ª reunión de los delegados de Ministros. Regla 60.5.

¹⁸ Véase CIDH, casos Cantoral Benavides vs. Perú; Loayza Tamayo vs. Perú y Suárez Rosero vs. Recomendación Procuración Penitenciaria de la Nación N°690/08.

¹⁹ Reglas Mínimas ONU. Regla 32.1.

²⁰ Reglas Mínimas ONU. Regla 32.2.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

infectólogo o tratante, quien deberá evaluar si la medida disciplinaria obstaculiza la continuidad del tratamiento del detenido en función de las previsiones del *Protocolo de Prevención, Diagnóstico, Asistencia y Tratamiento en Materia de VIH-SIDA*.²¹

En el informe que realice el profesional de la salud deberá consignarse: fecha y hora de la revisión médica, firma del profesional, la evaluación y los fundamentos de la misma. Dicho informe será monitoreado por un equipo de profesionales a los fines de generar una instancia de revisión.

El médico visitará todos los días a los detenidos que estén cumpliendo sanciones disciplinarias e informará por escrito al Director del Establecimiento, consignando fecha y hora de la visita e indicará específicamente si considera necesario poner término o modificar la sanción por razones de salud física o mental.²²

7) Cuando se disponga el aislamiento de un joven, sea en forma preventiva o como ejecución de la sanción impuesta, deberá informarse en forma fehaciente, inmediata y por escrito a su defensor, al juez competente, al Ministerio Público Fiscal y a la Procuración Penitenciaria de la Nación indicando los motivos de dicha decisión, el tiempo mínimo y máximo de permanencia en el encierro.²³

8) En caso de riesgo de la integridad física de los detenidos deberán arbitrarse los medios necesarios para evitar que el debido resguardo importe un agravamiento de las condiciones de detención. Deberá mantenerse respecto a esos detenidos un régimen que les permita acceso al patio y a actividades recreativas, laborales, culturales, educativas; asistencia y seguimiento médico y psicológico y comunicación con el exterior.

El Consejo Consultivo elaborará un marco legal que regule el resguardo de integridad física.

La administración penitenciaria deberá elaborar trimestralmente un informe en donde se especifique, para cada detenido que se encuentre bajo esa modalidad especial de detención, el cronograma de actividades diarias y sus cambios (conurrencia a

²¹ Resolución DN N°1342 del 3 de julio de 2009.

²² Reglas Mínimas ONU. Regla 32.3 y Reglamento de Disciplina para Internos, Decreto 18/90 art. 56 y 57.

²³ Cfr. Decreto 18 Reglamento General de Disciplina art. 35, CSJN “Romero Cacharane H A s/ ejecución Penal”, 9 de marzo de 2003.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

educación, actividades laborales, horas de patio, etc.). Dicho informe será remitido al juez competente, al defensor oficial, al Ministerio Público Fiscal y a la Procuración Penitenciaria de la Nación.

9) La decisión de un cambio de alojamiento y la definición de la unidad de destino deberá estar adecuadamente fundada y registrada por escrito. A fin de que la administración penitenciaria sostenga el especial y diferenciado tratamiento que, en términos de política, desarrolla sobre los jóvenes.

En el caso de los jóvenes que cumplen 21 años de edad y que deben ser alojados en unidades de adultos, la autoridad penitenciaria deberá, previo a disponer del traslado, poner en conocimiento del mismo al defensor, al juez competente, al Ministerio Público Fiscal y a la Procuración Penitenciaria de la Nación a fin de que puedan ejercer el control de legalidad y razonabilidad de esa decisión.²⁴ En ese sentido, tendrán un plazo de 15 días para expedirse respecto del mismo. En el caso de no existir respuesta y frente al cumplimiento del plazo en cuestión, el SPF procederá a hacer efectivo el traslado.

Asimismo, la administración penitenciaria deberá definir con antelación, alojamientos acordes para los jóvenes mayores de 21 años de edad que deben ser trasladados en cárceles para adultos, a fin de generar un proceso de transición entre un régimen y otro.

Se propiciará la permanencia de los detenidos mayores de 21 años en las unidades del CFJA, considerando que en muchos casos deben cumplir condenas cortas, destinando para ellos un sector específico.

Para la resolución del traslado y la definición de la unidad de destino para los jóvenes mayores de 21 años, se deberán considerar los siguientes puntos:

1. Situación procesal
2. Fase de la progresividad
3. Deseos del propio detenido
4. Relaciones familiares
5. Participación/incorporación en un programa de tratamiento: el traslado a otra unidad no se hará efectivo si ésta no puede ofrecer el mismo tratamiento.

²⁴ Cámara Nacional de Casación Penal Sala III. Causa 7424 15 de enero de 2007. “Casalotti Marcelo David s/ Recurso de Casación”; CSJN, “Nasso, José (int. U.7) s/habeas corpus”, 8 de abril de 1994, voto del Juez Fayt (317:282).

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

6. Tratamiento médico/psicológico: el traslado a otra unidad no se hará efectivo si ésta no puede ofrecer el mismo tratamiento.
7. Tratamiento en materia de VIH-SIDA y TBC: si el detenido fuera una persona infectada por el virus de VIH, enferma de SIDA o TBC, no podrá hacerse efectivo el traslado cuando no se encuentre garantizada la continuidad del tratamiento del detenido.²⁵
8. Desarrollo de actividades laborales: la unidad de destino deberá garantizar oferta laboral acorde a las actividades que realizaba en la unidad de origen.
9. Desarrollo de actividades educativas: la unidad de destino deberá garantizar la incorporación inmediata, sin dilaciones, al nivel educativo en curso; de no garantizarse esto, el traslado quedará suspendido hasta la finalización del ciclo lectivo.

En el caso de un cambio de alojamiento solicitado por el detenido y siempre que coincida la unidad de destino pedida y la definida por el SPF, se omitirán los requerimientos antes mencionados y se procederá a efectuar el traslado.

En relación a los cambios de alojamiento entre unidades dependientes del CFJA, deberá existir un informe elaborado por las áreas que hayan evaluado el traslado. Dicho informe quedará adjuntado al legajo individual de cada joven, con la posibilidad de ser consultado, sin restricciones, por la Procuración Penitenciaria de la Nación.

10) El Servicio Penitenciario Federal deberá brindar información oral y escrita, bajo constancia a los jóvenes detenidos que ingresen a una unidad penitenciaria, acerca de sus derechos, del régimen al que se encontrará sometido, normas de conducta, sistema disciplinario y medios autorizados para formular pedidos o presentar quejas, conforme a lo establecido por los artículos 66 de la Ley 24.660 y 21 del Reglamento General de Procesados.

A su vez, la administración penitenciaria deberá dar curso a lo establecido por los artículos 67 de la Ley 24.660 y 22 del Reglamento General de Procesados²⁶ y establecer

²⁵ Cfr. Protocolo de Prevención, Diagnóstico, Asistencia y Tratamiento en Materia de VIH-SIDA, op. cit.

²⁶ Dicha cuestión se encuentra establecida en las Resoluciones DN N°4693/2008 y 1331/2008.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

un modo fehaciente por el cual el detenido que presente una petición o entregue un escrito, reciba constancia de ello.²⁷

11) Las condiciones de detención y el funcionamiento de los programas que se apliquen en los establecimientos que alojan jóvenes adultos deben estar sujetos a la inspección independiente que incluya también a las organizaciones de la sociedad civil –cuyo objetivo sea la defensa de los derechos humanos.²⁸

Violencia entre detenidos

12) La autoridad penitenciaria realizará una adecuada distribución y clasificación de los jóvenes adultos con el objeto de prevenir potenciales conflictos entre detenidos. Las clasificaciones respecto del alojamiento de los jóvenes detenidos no podrán estar basadas en pautas discriminatorias o estigmatizantes. En tal sentido, podrá utilizar parámetros tales como: situación procesal del detenido (procesado o condenado), naturaleza del delito por el cual fue sentenciado y duración de la condena entre otras pautas objetivas. Para el caso de detenidos procesados también se realizarán clasificaciones fundadas en cuestiones objetivas, tales como posibilidades de riesgos o amenazas a los testigos, la existencia de sanciones disciplinarias previas, etc.

13) Con independencia del lugar en donde se disponga que deberán cumplir su detención, deberá otorgársele a la totalidad de los jóvenes adultos un régimen de vida carcelaria que les permita el acceso al patio y a actividades recreativas sin discriminaciones arbitrarias, así como acceso a tareas laborales, culturales y educativas; asistencia y seguimiento médico y psicológico y comunicación con el exterior.²⁹

²⁷ Se anexa al presente documento una propuesta de constancia para el pedido de audiencia o entrega de escrito u otros.

²⁸ Proyecto de creación del mecanismo nacional de prevención de la tortura. Dictamen conjunto de las comisiones de DDHH y Peticiones, en el 2010, del proyecto de ley 4810-D-09 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Presentado por la Diputada Donda en marzo de 2011 con el número 0956-D-011.

El proyecto mencionado recibió dictamen favorable de las comisiones de Derechos Humanos y de Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados de la Nación, restando un pronunciamiento en igual sentido para habilitar su discusión en el recinto, lograr la media sanción de ese cuerpo legislativo y continuar su tratamiento en la Cámara de Senadores para, finalmente, convertirse en ley.

²⁹ Reglas Mínimas ONU, Reglas 67, 68 y 69.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

14) La autoridad penitenciaria promoverá la utilización de mecanismos de soluciones alternativas de conflictos con expertos independientes o personal no penitenciario, así como comité de convivencia.

Tratamientos de adicciones

15) El acceso de los detenidos a un tratamiento de adicciones constituye un deber de la administración que se sustenta en el reconocimiento del derecho a la salud.

La autoridad penitenciaria garantizará un tratamiento de adicciones particularizado, es decir, acorde a las particularidades subjetivas³⁰ y efectivo a todos quienes lo requieran, con la menor dilación posible.³¹

16) En toda circunstancia, el tratamiento deberá respetar los siguientes principios: abordaje individualizado, continuidad del tratamiento, confidencialidad, consentimiento informado, se establezcan plazos de tiempo susceptibles de ser controlados – periodicidad de los encuentros, definición de los tiempos máximos y mínimos para el tratamiento, etc.

17) La autoridad penitenciaria deberá informar al juzgado competente, al defensor y a la Procuración Penitenciaria de la Nación siempre que un joven sea incorporado a un programa para el tratamiento de alguna adicción.

Acceso a la educación

18) La autoridad penitenciaria deberá garantizar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la cantidad de horas de clase semanales conforme a cada nivel según lo establece la Ley Nacional de Educación (Ley N°26.206).

19) La autoridad penitenciaria deberá garantizar la infraestructura, el equipamiento y la asistencia de los alumnos en tiempo y forma para las diversas ofertas educativas, en todos los niveles y modalidades de la educación formal e informal, dependientes de los sistemas educativos provinciales y de la CABA.

³⁰ Principios CIDH, Principio X.

³¹ Corte IDH, “Instituto de Reeducción del Menor vs. Paraguay”, Sentencia del 2 de septiembre de 2004, serie C, número 112.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

20) La autoridad penitenciaria, en coordinación con las autoridades competentes en materia de educación, implementará dispositivos que permitan facilitar el acceso a la certificación del nivel de estudio alcanzado a fin de que la carencia de este documento no afecte la continuidad de la trayectoria educativa de los jóvenes privados de libertad.

21) Todos los detenidos tienen derecho a solicitar la continuidad de sus estudios y deben ser incorporados inmediatamente en el nivel educativo en que lo soliciten (primario o secundario).

En el caso del NIVEL PRIMARIO: cuando el detenido carezca de la certificación de los tramos educativos cursados previamente, el Director de la escuela está facultado para certificarlos según la normativa vigente Res. CFE N°95 así como la finalización de este nivel educativo.

En el caso del NIVEL SECUNDARIO: cuando los detenidos carezcan del certificado analítico incompleto deberán ser admitidos en las clases, en cualquier momento del año lectivo, de acuerdo a su declaración y hasta tanto llegue la documentación correspondiente. Todas las escuelas del país están obligadas a emitir el CERTIFICADO ANALÍTICO INCOMPLETO a todo alumno que lo solicite para pasar a otro centro educativo. Si el Plan de Estudios cursado previamente no coincide con el ofertado por la escuela receptora, ésta generará los dispositivos necesarios para que el alumno reciba la asistencia educativa que lo nivele en función del plan nuevo, complementando de este modo lo realizado SIN estar autorizada la toma de EXÁMENES. En ningún caso se admitirá que al alumno se lo retrase en su trayectoria escolar por ningún motivo (Res. CFE N°102 y Recomendación Ministerial N°1883/2010).

22) La autoridad penitenciaria es responsable del traslado de los alumnos a las escuelas y la ausencia de los mismos no podrá estar relacionada con la aplicación de ninguna medida de seguridad, sanción y/o dinámica carcelaria.

23) Cuando un detenido se niegue a concurrir a clase, la autoridad penitenciaria deberá notificar dicha circunstancia con la debida fundamentación a las autoridades escolares, a su defensor y a la Procuración Penitenciaria de la Nación. En tales casos, se solicitará a través de las autoridades de la escuela la intervención de los organismos existentes en el

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

sistema educativo de cada jurisdicción (equipos de orientación escolar, gabinetes socioeducativos o similares). El trabajo con cada detenido se orientará a la inclusión educativa respetando siempre su decisión personal.

24) La autoridad penitenciaria deberá evitar la superposición horaria entre las actividades educativas y las laborales. En tal sentido, deberá habilitar horarios diferenciales para ambas actividades. Pero cuando exista superposición horaria, quienes prioricen la asistencia a la actividad educativa recibirán igualmente el pago del peculio por ese tiempo.³²

Acceso al trabajo

25) La autoridad penitenciaria garantizará y promoverá la existencia de una oferta regular de talleres de capacitación laboral para los jóvenes adultos detenidos. Cuando dependan de los sistemas educativos han de encuadrarse en los requisitos y obligaciones establecidas en los ítems 18 a 24 de este protocolo.

26) La autoridad penitenciaria deberá promover el trabajo formativo. En tal sentido, se debe promover en los jóvenes adultos el desarrollo de capacidades para el desempeño laboral.³³ A tal fin, se facilitará el acceso de actores externos para llevar adelante talleres productivos con los jóvenes detenidos.

27) La autoridad penitenciaria deberá garantizar el acceso al trabajo durante la detención sin restricciones arbitrarias y/o discriminaciones.

28) La autoridad penitenciaria deberá gestionar ante la ANSES, sin dilaciones, la obtención del CUIL correspondiente a todos los jóvenes adultos que deseen trabajar. Asimismo, deberá garantizar la entrega, en tiempo y forma, de sus respectivos recibos de sueldo a todos los detenidos que trabajen.

Acceso a actividades recreativas y culturales

³² Cfr. Ley 24.660, art. 197.

³³ Cfr. Ley 24.660, art. 197.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

29) La autoridad penitenciaria deberá garantizar el acceso de los jóvenes adultos detenidos a actividades recreativas, culturales, deportivas y sociales. Para ello pondrá a disposición de los detenidos el espacio al aire libre, las instalaciones y el equipo que sea necesario.³⁴

30) Los establecimientos que alojen jóvenes adultos dispondrán de bibliotecas, con suficientes libros, periódicos y revistas educativas, con equipos y tecnologías apropiadas a las necesidades e intereses de los jóvenes según los recursos disponibles.³⁵ Dependiendo de las escuelas existirán también bibliotecas escolares abiertas para los alumnos y no alumnos sin fusionarse ni funcionar en el mismo espacio que la del SPF.

31) La autoridad penitenciaria promoverá e incentivará la libertad de expresión, entendiéndola como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo ya sean de forma oral, escrita o impresa, en forma artística o por cualquier otro medio elegido.

Servicios médicos

32) En coordinación con el Ministerio de Salud, la autoridad penitenciaria garantizará el derecho a la salud de los jóvenes detenidos, entendido como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social.³⁶ En el caso de los jóvenes adultos detenidos que se encuentren infectados por el virus de VIH o enfermos de SIDA y/o Tuberculosis, rigen las previsiones del *Protocolo de Prevención, Diagnóstico, Asistencia y Tratamiento en Materia de VIH-SIDA y Tuberculosis*.³⁷

33) La autoridad penitenciaria permitirá y facilitará que los jóvenes detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal.³⁸

³⁴ Reglas ONU, Reglas 21 y 78.

³⁵ Principios CIDH, Principio XIII.

³⁶ Principios CIDH, Principio X.

³⁷ Resolución DN N°1342 del 3 de julio de 2009 y Resolución DN N°1944/11 del 4 de octubre de 2011.

³⁸ Corte IDH, "Tibi vs. Ecuador", Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C número 114; "Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela", Sentencia del 5 de julio de 2006, Serie C, Número 150. "García Asto vs. Perú", Sentencia del 25 de noviembre de 2005, Serie C número 137. "De la Cruz Flores vs. Perú", Sentencia del 18 de noviembre de 2004, Serie C número 115.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

34) A fin de garantizar la accesibilidad a la salud integral de los jóvenes detenidos, un médico, un trabajador social y un psicólogo del Servicio Penitenciario Federal deberán recorrer –como mínimo una vez por semana– todos los pabellones con el objeto de recabar información sobre necesidades asistenciales, de infraestructura, alimentación y otras demandas que de la recorrida surgieran.

35) Los profesionales y auxiliares de salud del Servicio Penitenciario Federal deberán planificar y articular con el área de educación en co-gestión con el Ministerio de Salud de la Nación campañas sobre enfermedades prevalentes propiciando la participación proactiva de los jóvenes detenidos.

36) La autoridad penitenciaria deberá asegurar que en los espacios de circulación de los detenidos/as (pabellones, educación, recreación, visita y trabajo) se coloquen los posters de prevención en salud, folletería y preservativos que distribuye el Ministerio de Salud de la Nación.

37) La información sobre la salud física y mental de los jóvenes detenidos deberá incorporarse en sus respectivas historias clínicas, en donde deberá detallarse, entre otras cosas, lo siguiente: la atención médica que reciba el detenido en la unidad penitenciaria, fecha y hora de las consultas médicas, cumplimiento de las prescripciones, la continuidad del tratamiento prescripto, consultas con especialistas en hospitales extramuros, detalle de los profesionales responsables en cada paso del tratamiento o atención que reciba el detenido especificando el rol de cada uno de ellos, el diagnóstico, fecha y hora de las consultas médicas, etc.

38) La autoridad penitenciaria entregará a los jóvenes adultos que recuperen su libertad copia de su respectiva historia clínica a efectos de garantizar la continuidad de los tratamientos previos que éste hubiera realizado y/o estuviera realizando. Con la misma finalidad, la autoridad penitenciaria requerirá a las instituciones de salud extramuros copias de las historias clínicas de los detenidos que deben ser tratados por el servicio médico de la unidad carcelaria. En el caso de traslado a otra unidad por cumplimiento de la mayoría de edad, el mismo deberá efectivizarse conjuntamente con su historia clínica.

Contacto con el mundo exterior

39) Debe priorizarse el mantenimiento y desarrollo de las relaciones entre el joven y su familia. En este sentido, la autoridad penitenciaria debe alentar a las familias de los detenidos para que visiten al detenido con la mayor periodicidad posible y también a mantener contacto postal y/o telefónico. En este sentido, la autoridad penitenciaria promoverá la ampliación de la cantidad de horas de visitas.

40) La autoridad penitenciaria garantizará el acceso de los jóvenes detenidos a las comunicaciones telefónicas periódicas sin restricciones en función del régimen aplicado.

41) La autoridad penitenciaria garantizará el derecho de los jóvenes a mantenerse informados periódicamente. En tal sentido, se les facilitará el acceso a la lectura de diarios, revistas o publicaciones especiales; a escuchar radio o mirar televisión o a cualquier otro medio de comunicación.³⁹

Pautas de interpretación del Protocolo

42) Las reglas de este protocolo no derogan ni restringen ningún derecho de los detenidos que se encuentre reconocido en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Naciones Unidas, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en la Ley 24.660 u otra norma de cualquier nivel y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías allí reconocidos.

En cualquier caso, el intérprete deberá seleccionar y aplicar la norma que resulte más favorable para el detenido o bien preferir la interpretación más amplia de sus derechos (*Principio Pro homine*).

2.4. El Resguardo de Integridad Física como herramienta de gobierno de los conflictos. Tentativa de invisibilizar el aislamiento

³⁹ Reglas Mínimas ONU, Regla 39.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

De modo introductorio es necesario recordar que la medida de seguridad de Resguardo de Integridad Física (RIF) resulta una modalidad de detención carente de toda regulación legal, cada vez más extendida en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

El vacío legal que representa permite que su aplicación fáctica admita múltiples versiones de aplicación, arbitrarias y violatorias de derechos que, según lo relevado por este organismo, pueden abarcan desde la sectorización de los pabellones, el encierro en celda individual de los detenidos durante gran parte del día, la carencia de actividades laborales y educativas; y muchas veces todas ellas juntas.

El trabajo cotidiano que realiza el Equipo de jóvenes con los detenidos en el Módulo V - Anexo permitió tomar conocimiento de la modalidad del régimen que asume el Pabellón 1 de RIF y motivó la realización de una indagación focalizada en dicho sector.⁴⁰

a. Relevamiento de la vida con RIF en el pabellón 1 del Módulo V - Anexo

Vivir con RIF para un joven conlleva inevitablemente el sometimiento a un régimen de detención más gravoso que en el resto de los pabellones del Módulo V - Anexo, en relación a la cantidad de horas de encierro en celda individual que implica el mismo y la consecuente restricción de actividades.

Según la información brindada por las autoridades del Módulo, los jóvenes no pueden compartir el espacio común del pabellón, por lo que además de pesar sobre ellos una medida de RIF –que los separa del resto de la población y los agrupa en el pabellón– pesa sobre ellos un régimen de sectorización, que durante largos meses se tradujo en una división de la población en cinco grupos, luego en cuatro y posteriormente en dos.

Según explicaron las autoridades de la Unidad, por medidas de seguridad, la posibilidad de acceso al sector común de uno de los grupos está inevitablemente sujeta al encierro de los demás, alternando de ese modo las salidas de los detenidos.

Con la precedente información se decidió llevar adelante un relevamiento de información partiendo de la consideración de que los jóvenes constituyen un colectivo sobrevulnerado y sobre el cual el ejercicio de la violencia suele ser más agudo que sobre el resto de la población privada de libertad. En ese sentido, la aplicación del aislamiento, bajo sus diversas modalidades –sanción de aislamiento, sectorización, RIF, etc.– en el caso de la población de Jóvenes Adultos es asumida por la administración penitenciaria como la

⁴⁰ Para mayor información, véase Informe Anual 2010, capítulo VIII, “Jóvenes Adultos en cárceles federales”.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

principal herramienta de gestión y gobierno de los conflictos y en la mayoría de las ocasiones es presentada por el SPF como la única opción para evitar que se “maten entre ellos”.

La hipótesis fundamental que guió el relevamiento es que los jóvenes privados de libertad que son alojados bajo la modalidad de RIF sufren de manera más gravosa la vulneración de sus derechos, fundamentalmente en lo que respecta al acceso a la educación y al trabajo.

Como objetivo se decidió monitorear el desarrollo efectivo de los derechos de los jóvenes alojados con RIF, y para ello se decidió realizar un relevamiento de la situación mediante un instrumento de recolección de datos que contemplara los ejes temáticos más problemáticos en cuanto al tratamiento penitenciario como son el trabajo y la educación.

En base al objetivo planteado se decidió la toma de entrevistas semiestructuradas y se confeccionó para ello un instrumento de recolección de datos que incluyó preguntas cerradas y también abiertas con el propósito de recoger información acerca de las percepciones que tienen los jóvenes de su condición de encierro.

El universo lo conformaron todos los alojados en el pabellón 1 del Módulo V - Anexo del Complejo Federal para Jóvenes Adultos del SPF.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011 se llevó a cabo el trabajo de campo, habiendo realizado un total de cuarenta y una entrevistas.

b. Resultados del Relevamiento

Acceso a trabajo

De acuerdo a lo previsto por la normativa vigente en relación a los jóvenes, “...en su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento de los vínculos familiares”.⁴¹ Se sobreentiende entonces que la agencia estatal debería prever actividades formativas en las que ellos puedan ser capacitados en un oficio, durante el período de detención, y prepararse para el momento de recuperar la libertad. Sin embargo, a la hora de ser consultados los jóvenes sobre la posibilidad de acceder a un trabajo, se pudo constatar que deben permanecer alojados en el pabellón 1 entre cuatro y seis meses, previo a ser incorporados a una actividad laboral –en el caso de los que logran acceder a ella–. Así, de los cuarenta y un

⁴¹ Artículo 197 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

entrevistados, sólo veinte se encontraban afectados a trabajo. Actividad laboral que consiste exclusivamente en la confección de broches para la ropa; es decir, en colocar entre maderita y maderita el resorte que permite su funcionamiento.

Al preguntarles por la periodicidad con la que trabajan, todos respondieron que entre dos y tres horas por día, dos o tres veces por semana, pero que esto siempre depende si son llamados o no para trabajar o si el área de trabajo cuenta con el material necesario para el desarrollo de la actividad.

También se pudo constatar que a medida que pasan más tiempo de detención en el RIF la administración les va ampliando la jornada laboral. Se pudo corroborar que los jóvenes trabajadores comienzan firmando entre 30 y 60 horas mensuales y que los que llevan un año o más, pueden firmar entre 100 y 140 horas de trabajo. Uno de los jóvenes describe claramente la situación, cuando dice *“las horas se van remando”*.

En el caso de los jóvenes que trabajan, al ser consultados sobre si querían ampliar la jornada de trabajo, todos respondieron afirmativamente ya que necesitan más dinero para poder solventar sus gastos dentro del encierro, además de colaborar con sus familias.

Para los desocupados la situación es más adversa, ya que todos informaron que han sacado audiencia con el jefe de trabajo y en su amplia mayoría no han sido atendidos ni por éste ni por personal del área, y en el caso de los que fueron atendidos no han sido incorporados a trabajo, pese a que muchos de ellos contaban, o su familiares lo aportaron, con el número de CUIL para acelerar el trámite.

La urgencia que tienen en acceder a un taller laboral queda de manifiesto en la respuesta que brindan de manera unánime al ser consultados acerca de en qué taller tendrían interés en participar: todos respondieron *“en cualquiera”*.

A la necesidad económica propia del encierro, se le agrega en el caso del pabellón 1, la sectorización y las largas horas de encierro. Así fue que muchos de los jóvenes declararon tener intenciones de poder trabajar más horas con el objetivo de lograr pasar más tiempo fuera de la celda, reduciendo de ese modo la gran cantidad de horas de *“engome”*.⁴²

Acceso a la educación

⁴² Terminología utilizada en la cárcel para hacer referencia al período de tiempo que pasan encerrados.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

La nueva Ley 26.206 de Educación Nacional⁴³ dispone en su artículo 55 que *“La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución”*.

En el presente relevamiento se pudo constatar que los jóvenes alojados en el RIF sólo tienen clases entre una y dos horas por día, dos o tres veces por semana. Todos informaron que, según al grupo sectorizado o “recreo” al que pertenezcan, una semana asisten los días lunes, miércoles y viernes y otras los días martes y jueves, siempre una hora o dos.

Otro dato significativo en cuanto a la educación es que muchos de los jóvenes que completaron un nivel educativo estando en libertad, por no contar con la documentación acreditante, o bien repiten el nivel o, lo que es aún peor, se encuentran cursando niveles muy por debajo del último nivel alcanzado en la calle pese a lo normado por la Ley de Educación vigente –Res. CFE N°102 y Recomendación Ministerial N°1883/2010.

Régimen de sectorización

Complementado los ejes temáticos de trabajo y educación, se incluyeron también preguntas para indagar sobre el nivel de encierro en el pabellón. De ese modo se pudo corroborar que en el período de tiempo en que se realizó el presente relevamiento el pabellón 1 se hallaba sectorizado en dos grupos.

En cuanto a las horas de encierro en celda individual, se constató que pesaba sobre los jóvenes un régimen de encierro de diecinueve horas por día y de diecisiete horas y media, los días que podían salir a un recreo por la noche –de una hora y media–. En consecuencia sólo pasaban entre cinco y seis horas y media –dependiendo del día– en el SUM del pabellón.

Es importante resaltar que en las entrevistas tomadas en el mes de noviembre, los jóvenes comenzaron a hacer mención a dichos de las autoridades que hacían referencia a

⁴³ Véase Capítulo XII, “Educación en contextos de privación de libertad”.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

la incorporación de actividades y la disminución del encierro. Uno de los jóvenes menciona *“hace una semana que nos están sacando a campo de deportes y a cine. Nos dijeron los jefes que van a hacer las cosas para que salgamos más tiempo, así no estamos tan encerrados”*. La información cobra importancia teniendo en cuenta la puesta en marcha del Consejo Consultivo.

c. Conclusiones

El SPF “resguarda la integridad física” de los detenidos mediante la aplicación de un régimen de vida sectorizado y aislamiento prolongado, carente de todo sustento normativo.

Dichos regímenes diferenciales que obligan a los presos a permanecer encerrados gran cantidad de horas diarias con el objetivo de reducir “los niveles de conflictividad”, se presentan como una estrategia de gobierno de la institución carcelaria. Lograr desentrañar dichas estrategias se vuelve objetivo primordial a la hora de dar cuenta de la argucia de construir tipos de poblaciones para justificar políticas de gobierno carcelario violatorias de derechos.

La herramienta que tienen los detenidos de solicitar una medida de RIF con el fin de poder vivir más tranquilos al separarse del resto de la población, se transforma en una herramienta cruel que los degrada, por medio de la cual se evidencia nuevamente el privilegio al orden por sobre el tratamiento y que termina produciendo más violencia de la que intentan reprimir y más daño del que, dicen, intentan evitar.

2.5. Talleres culturales para jóvenes

En línea de continuidad con los objetivos de trabajo fijados, el Equipo de Jóvenes se propuso encarar la dimensión de los derechos fundamentales y su reconocimiento, a través de una propuesta lúdica y cultural.

Las unidades donde son alojados los jóvenes –y fundamentalmente el Módulo V - Anexo– se caracterizan por la carencia de actividades extracurriculares y la contrapartida resulta ser el “encierro sobre el encierro”.

La Propuesta es conformar dentro de la cárcel espacios alternativos donde se promuevan experiencias didácticas, artísticas y culturales en las que cada uno aporte sus ganas, iniciativas y experiencias y en donde a su vez, se promueva el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

La iniciativa de esta propuesta revela una doble estrategia. Por un lado, responde a la necesidad de los jóvenes –por su propia condición– y, por otro, permite abrir la cárcel hacia actores de la sociedad civil con proyectos alternativos y externos a la dinámica carcelaria, permitiendo la vinculación con el afuera y al mismo tiempo simboliza “más ojos” atentos al trato que se les da a los jóvenes, actuando indirectamente como agentes de prevención.

Fundamentación, objetivos generales y específicos y destinatarios

Se considera necesario abordar la temática de los derechos de los jóvenes desde una perspectiva amplia y abarcadora, sabiendo que el derecho a recrearse y a desarrollar la creatividad son también derechos fundamentales que si no se incentivan y promueven difícilmente puedan ser reconocidos y respetados.

Luego de una evaluación previa acerca de las estrategias de trabajo que resultaran más acordes para abordar estas dimensiones, se propone llevarlo a cabo mediante talleres que emprendan actividades creativas y/o recreativas como son el teatro, la música, la escritura, la fotografía y las artes visuales.

Es importante considerar que es posible obtener mejoras cualitativas en la calidad de vida de los jóvenes que se encuentran privados de libertad, siempre que existan y se promuevan vínculos de confianza y se creen espacios de inclusión socioculturales que propongan alternativas transformadoras.

Los jóvenes tienen derecho a jugar, a divertirse y a dedicarse a las actividades que más les gusten. Como equipo de trabajo, nos interesa acompañarlos y ofrecerles espacios en los que puedan desplegar y fortalecer sus capacidades expresivas y creativas.

Como objetivo vector se persigue el promover e incentivar la libertad de expresión, entendiéndola como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, ya sean de forma oral, escritas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el joven. Donde cada uno pueda desarrollar su propia personalidad, expresando su pensar y su sentir a través de los medios que elija para ello.

Como objetivo general el proyecto busca por un lado, construir espacios de creación mediante la participación y discusión, desde los cuales fortalecer las capacidades organizativas y expresivas de los participantes. Por otro, y de forma simultánea, al habilitar el ingreso de personas de la sociedad civil, propicia el dificultoso proceso de apertura de la prisión, transparentando una realidad que históricamente ha sido invisibilizada.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Como objetivos específicos se propone: fortalecer las capacidades expresivas de los jóvenes; ampliar la oferta de espacios donde los jóvenes puedan desplegar sus habilidades organizativas; acercar herramientas de promoción y ejercicio efectivo de sus derechos; tender puentes entre “el adentro” y “el afuera”.

Los destinatarios son la población de jóvenes alojados en el Módulo V - Anexo del CFJA. Los espacios de trabajo propuestos están destinados a alrededor de 100 de estos jóvenes de entre 18 y 21 años de edad.

Realización y desarrollo⁴⁴

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 y enero de 2012, los días lunes y miércoles de cada semana un equipo de trabajo compuesto por talleristas e integrantes del Equipo de Jóvenes de la PPN concurre al Módulo V - Anexo del Complejo Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz para desarrollar los cinco talleres culturales con los jóvenes que se encuentran ahí detenidos.

A la respuesta acostumbrada de más encierro en el encierro, se presentó y desarrolló exitosamente una contrapropuesta lúdica y cultural, alternativa y transformadora.

El objetivo inicial del proyecto respondió a una doble estrategia de, por un lado construir junto a los jóvenes espacios alternativos a los propuestos por el SPF, acordes a su edad e intereses, y por el otro, sumar “más ojos” a la cárcel. En este sentido y atento al estado de los jóvenes el desarrollo del trabajo tuvo una excelente recepción por parte de los concurrentes a los talleres. Así fue que en los tres meses de duración, alrededor de cien jóvenes participaron de las actividades propuestas.

Con dichos talleres quedó en evidencia, además, la hipótesis de que en el encierro sólo se pueden generar espacios y vínculos de confianza con personas provenientes de la sociedad civil, que no tengan vinculación con la fuerza que los custodia en el período de detención. Todos los asistentes resaltaron las cualidades constructivas de los talleres en tanto se constituyeron como espacios novedosos, atravesados por dinámicas vinculares nada frecuentes en contextos de encierro. Demostrando en tal sentido que es de primordial

⁴⁴ Proyecto desarrollado por el Equipo de Niños, Jóvenes y Adolescentes privados de libertad, conformado por la Dra. Marina Chiantaretto, la Lic. Laura Maccarrone, la Lic. Natalia Osorio Portolés, la Lic. Mariana Maccarrone y el Dr. Mauricio Motille. Talleristas: Audiovisual: Martín Céspedes, Martín Vega; Teatro: Laura Paredes, Paula Acuña; Fotografía estenopeica: Sebastián Vricella, Gabriel Storino; Periodismo: Santiago Cantenys, Nahuel Gallota; Música y versada latinoamericana: José Lavallén, Lautaro Merzari, Marcos Arance y Andrés Tersoni; Documentalistas: Lucía Cantenys, Dolores Dacal, Pilar Llauradó y Carolina Soto Rivera.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

importancia que este tipo de espacios no los desarrolle el SPF ni tenga injerencia sobre el contenido de las actividades, además de cuidar con celo que no tenga presencia en las aulas durante su desarrollo.

En ese sentido es fundamental subrayar la importancia de la intromisión de espacios disruptivos al sistema de encierro, que les hacen posible a los jóvenes reflexionar, en ámbitos de intimidad, acerca de su estado y estadía, tanto dentro como fuera del dispositivo carcelario, al margen de un marco institucional que se caracteriza por reducir el acceso a la educación y la cultura a meros componentes de una lógica premial.

Durante los tres meses se obtuvieron resultados concretos en cuanto a la calidad de vida de los jóvenes. A modo de ejemplo es posible resaltar la intervención de la coordinación y los talleristas del proyecto para incidir en la generación de alternativas a las actividades habitualmente desarrolladas en el encierro, donde la seguridad se antepone ante cualquier otro criterio, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por el Equipo de Jóvenes de la PPN. De esta forma, se discutió en profundidad sobre lo relevante que resultaba que los jóvenes alojados en el pabellón 1 de RIF pudieran compartir el espacio del taller de música. Jóvenes de ambos grupos diferenciados en que se hallaba sectorizado el pabellón 1 pudieron así compartir el espacio del taller. El normal desenvolvimiento del taller, junto a otras gestiones realizadas desde la Procuración Penitenciaria y al cambio de autoridades en el Módulo, ha influido positivamente en el cese de la medida de sectorización que se implementaba en el pabellón desde julio de 2010 y que ocasionaba una grave vulneración a los derechos humanos de los jóvenes allí alojados.

Es menester destacar que la puesta en marcha del proyecto coincide temporalmente con el momento de finalización de las reuniones convocadas por la Dirección Nacional del SPF, en cumplimiento de la disposición judicial del habeas corpus presentado por este Organismo. La acción judicial denunciaba, precisamente, la medida de sectorización detectada en otro de los pabellones del Módulo V –el 3– y las consecuencias que ésta acarrea sobre los detenidos. En tal sentido, se considera importante no restar importancia a tal coyuntura, que contó además con la puesta en conocimiento a todos los Organismos y Organizaciones de la sociedad civil que conformaron el Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias para Jóvenes Adultos.⁴⁵

⁴⁵ Resolución DN N°1172.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Por otro lado la propuesta de los talleres –precisamente por ser externa al SPF y al perverso sistema de premios y castigos que domina el tratamiento penitenciario– permitió la elección y la concurrencia libre y desinteresada de los jóvenes, quienes cada lunes y miércoles esperaban ser anunciados para ir al taller al que estaban concurriendo.

Evaluación del proyecto: dificultades y resultados

En base a los objetivos generales y específicos propuestos en el proyecto inicial, se presenta a continuación la evaluación del trabajo realizado, poniendo en consideración las dificultades y las circunstancias coadyuvantes.

Dificultades

Si bien las autoridades penitenciarias a cargo del Módulo V - Anexo se mostraron en todo momento predispuestas a la realización de las actividades en las instalaciones de la cárcel, a la hora del desarrollo concreto surgieron una serie de obstáculos, que a continuación se detallan y que es importante tener en consideración para una segunda etapa del proyecto:

- Retardo en la entrega de los listados completos y actualizados de los jóvenes participantes en los talleres, que resultaban indispensables cada semana debido al gran flujo de cambios de alojamiento.
- Dilación de los tiempos entre la llegada de los talleristas a la unidad y el comienzo de las actividades. Según el día, podían pasar entre 30 y 40 minutos, pese a que el área de Educación contó desde el inicio con los listados con los nombres y pabellones de las personas que integraban los talleres.
- Primacía de los criterios de seguridad y del personal abocado al sector –responsables de los movimientos de las personas–. En varias ocasiones se constató que al momento de llevar a los jóvenes a los talleres algunos no eran llamados por el SPF o que se los convocaba a salir del pabellón dándoles información errónea.

Resultados en el trabajo del Equipo de Jóvenes

- Se habilitó una mayor visibilidad del trato que la agencia penitenciaria despliega sobre los jóvenes, actuando –los talleristas– indirectamente como agentes de detección de obstáculos y problemáticas acuciantes, los cuales transmitieron a los asesores del Equipo toda circunstancia que considerasen preocupante o gravosa.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

- Se abrió la cárcel hacia miradas externas, abriendo canales de ese modo al escrutinio de la sociedad.
- Propició la toma de conocimiento, por parte de los asesores del Equipo de Jóvenes (de forma directa y sin exponer a los jóvenes) en caso de ver a alguno de ellos golpeado o en malas condiciones físicas.
- Facilitó la circulación de información –y la llegada de la misma al Equipo de Jóvenes– respecto de los procedimientos de requisa, conflictos en los pabellones, sanciones impuestas, etc., permitiendo la rápida intervención de los asesores ante cada situación.
- Permitió que el recurso habitual del Equipo, que es la entrada a los sectores de alojamiento, fuese llevada a cabo con mayor fluidez con la intención de buscar a los jóvenes que el SPF argumentaba que no querían “bajar” o que se negaban a hacerlo.
- Permitió el acceso y movimiento casi irrestricto de los asesores del Equipo de Jóvenes hacia los distintos sectores de la unidad –pabellones pero también áreas, oficinas administrativas, sectores de recreación, etc.

Resultados en cuanto a las condiciones de vida intramuros de los jóvenes

- Se crearon “espacios puentes” promoviendo la vinculación con el afuera.
- Permitió que muchos jóvenes tuvieran un primer acercamiento con experiencias artísticas y culturales y que varios otros se reencontraran con actividades que solían desarrollar en su vida en libertad, entre ellas, y preponderantemente, la música.
- Posibilitó la incorporación a las actividades de los jóvenes alojados en Pabellón 1 bajo régimen de Resguardo de Integridad Física y sectorizados en dos grupos.
- Permitió a los jóvenes tener y contar, cada semana, con actividades recreativas esenciales para atravesar la vida intramuros, fundamentalmente durante el período de receso del ciclo escolar.
- Se promovió la libertad de expresión, entendida como la libertad de recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, propiciando el desarrollo de la personalidad, la posibilidad de expresar el propio pensar y sentir.
- En contraposición al sistema de objetivación propuesto por la cárcel, se constató que es posible generar espacios de construcción y subjetivación.
- Se ofrecieron herramientas de promoción y ejercicio efectivo de derechos.

PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN
Informe Anual 2011

Conclusiones

Como objetivo a largo plazo del Equipo de trabajo, resulta de fundamental importancia profundizar en la temática de la promoción de derechos, habilitándole la entrada a la cárcel a actividades alternativas que posibiliten el desarrollo de instancias que intenten agrietar la primacía del mero encierro.

Para ello resulta elemental abordar la temática de los Derechos desde una perspectiva amplia y abarcadora, sabiendo que el derecho a recrearse y a desarrollar la creatividad son también derechos fundamentales que se tornan imprescindibles a la hora de pensar en cómo contrarrestar mínimamente las consecuencias que imprime la cárcel sobre los jóvenes.

En ese sentido es posible afirmar que los talleres funcionaron como espacios constructivos a través de los cuales los jóvenes pudieron desarrollar ciertas capacidades, que trascendieron y quebraron, al menos momentáneamente, la lógica de la vida intramuros. Operaron asimismo como instancias que permitieron la reflexión acerca de la propia vida dentro y fuera de la cárcel, además de ser espacios de libertad en donde desplegar y fortalecer las capacidades expresivas y creativas.